

Globalización y comercio: desafíos para el mundo árabe

ZIAD ABDEL SAMAD¹

Dramáticos acontecimientos internacionales apuntan a la tendencia de la «militarización de la globalización», que puede considerarse una consecuencia radical del fracaso de la globalización y de las políticas económicas tradicionales para asegurar la equidad social y económica. Estos acontecimientos también indican el fuerte deseo de fortalecer el control directo ejercido sobre los recursos culturales, económicos e intelectuales del mundo por parte de los poderes hegemónicos neoliberales.

El poder y la influencia de las instituciones financieras internacionales y la OMC y el creciente predominio de los tratados multinacionales de comercio llevaron a la imposición de programas de ajuste estructural, a la liberalización económica, a la reducción del gasto público en los servicios sociales, a la privatización de la administración pública y al creciente papel e influencia del sector privado en la formulación y la aplicación de las estrategias. Estos factores también hicieron que los países se desviaran de acuerdos y convenios internacionales en materia de políticas de derechos humanos, erradicación de la pobreza, desempleo, protección ambiental y marginación social.

La región árabe y el desafío de la globalización

Las amenazas para derrocar al régimen iraquí van en aumento. La guerra contra Afganistán aún no ha conquistado sus objetivos finales, y se anticipa que se extenderá a los ámbitos financiero, económico y cultural y que involucrará a otros países y regiones con la excusa del combate al terrorismo. Esta guerra trae aparejado un grave debilitamiento de los derechos humanos, las libertades y la democracia a nivel nacional e internacional. También va acompañada de uno de los escasos modelos actuales de colonización extranjera directa, que se lleva a cabo en Palestina y en parte de los territorios de Siria y Líbano.

La «militarización de la globalización» y la lucha contra el terrorismo

Dramáticos acontecimientos internacionales apuntan a la tendencia de la «militarización de la globalización», que puede considerarse una consecuencia radical del fracaso de la globalización y de las políticas económicas tradicionales para asegurar la equidad social y económica. Estos acontecimientos también indican el fuerte deseo de fortalecer el control directo ejercido sobre los recursos culturales, económicos e intelectuales del mundo por parte de los poderes hegemónicos neoliberales.

Las sociedades de Medio Oriente, individual y colectivamente, han condenado los atentados terroristas del 11 de septiembre contra civiles inocentes en Estados Unidos. Están convencidas de que el terrorismo es un medio ilegítimo para resolver búsquedas legítimas de justicia social y sistemas internacionales justos. La guerra en curso contra Afganistán, sin embargo, trasciende la reacción a estos atentados. La guerra es un plan internacional lanzado para reforzar el predominio internacional de ciertos intereses económicos e industriales multilaterales.

La guerra maneja numerosos calificativos y justificaciones, incluyendo nombres ideológicos, políticos y hasta racistas. Se divide al mundo en dos polos: el proestadounidense y el antiestadounidense/proterrorismo. La guerra fue denominada la «Tercera Guerra Mundial contra el terrorismo» por la Estrategia de Seguridad Nacional presentada ante el Congreso de Estados Unidos. Este tipo de términos fomenta enfrentamientos entre los pueblos y

desata reacciones fanáticas. Esto es acentuado por las tendencias globalizadoras vigentes que han sido asociadas con la pobreza y la marginación generalizadas y la profundización de la brecha entre el Norte y el Sur y entre ricos y pobres. Estas tendencias también están asociadas con el predominio del doble discurso en las relaciones internacionales, particularmente en la región árabe. Mientras Israel (el único Estado con armas nucleares en la región) viola los derechos humanos y todas las resoluciones y convenciones de las Naciones Unidas, Estados Unidos insiste en lanzar una guerra contra Iraq, sólo porque éste último es capaz de fabricar armas estratégicas y no respeta la democracia, los derechos humanos ni la equidad social.

La causa palestina y la ocupación israelí

Los últimos acontecimientos militares suceden simultáneamente con el agravamiento de las agresiones israelíes contra el pueblo y los dirigentes palestinos. La violencia israelí está basada en débiles justificaciones que anulan el deseo palestino de sostener el desarrollo democrático que es su derecho. La violencia estatal queda de manifiesto en la sistemática reubicación de los palestinos y la apropiación indebida de sus tierras, que parece ser una prioridad del último gobierno israelí. Al mismo tiempo, continúa la ocupación israelí de territorios árabes en Palestina, Líbano y Siria. A los palestinos se les priva de la libertad, la autodeterminación y el derecho a volver a sus territorios. También se les niega el derecho a fundar un estado independiente, en un contexto de protección y respaldo evidente e ilimitado por parte de Estados Unidos hacia Israel.

La estabilidad, la paz y las oportunidades de desarrollo social y económico en Medio Oriente no se materializarán a menos que la ocupación israelí termine y los asentamientos sean totalmente desmantelados. Se deben garantizar derechos nacionales sólidos para los palestinos, específicamente el derecho a retornar a sus tierras, a la autodeterminación y a fundar un estado independiente en los territorios palestinos según las leyes internacionales.

La amenaza de la guerra contra Iraq

El sufrimiento actual del pueblo iraquí es el resultado del doble asedio que ejercen la dictadura y el régimen totalitario iraquí, por un lado, y el injusto embargo impuesto por la comunidad internacional, por el otro. La presencia militar extranjera en el Golfo, las continuas amenazas de guerra y de aniquilación del sistema político iraquí, a pesar de que el régimen iraquí se sometió a la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU, y de la oposición popular y oficial internacional y árabe, constituyen una grave amenaza a la estabilidad y la paz internacional, y un obstáculo al desarrollo socioeconómico de la región.

En este contexto, la guerra en Afganistán y en otras regiones en nombre de la guerra contra el terrorismo, la amenaza de guerra contra Iraq, la ocupación y la creciente agresión israelí en Palestina son todas expresiones tangibles de la militarización de la globalización, que no es sólo un problema árabe sino un desafío que enfrenta el mundo entero. Esto implica, por tanto, la creación de una alianza mundial en contra de la guerra, que prevenga a la humanidad de sus catastróficos resultados.

¹ Director Ejecutivo de la Red de ONG Árabes para el Desarrollo. El autor agradece la ayuda de Zena Halabaa.

Democracia y derechos humanos

Los pueblos árabes rechazan toda forma de violación de su soberanía, independencia y autodeterminación, y particularmente de todo tipo de presencia militar extranjera en las naciones árabes, pero la respuesta religiosa fanática no debería ser la alternativa a los sistemas en el poder. El fortalecimiento de la democracia y de la participación popular, el respeto de los derechos humanos y la justicia social son todas condiciones necesarias para superar las dificultades que padece la población árabe.

En este contexto, varios informes y estudios internacionales, como el último Informe sobre Desarrollo Humano Árabe, publicado a principios de 2002 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), subrayan el hecho de que los indicadores de libertad, democracia y derechos humanos de los países árabes están entre los peores del mundo.

Los desafíos de desarrollo en la región y el sistema de comercio internacional

En lugar de aprobar medidas prácticas que reduzcan la brecha entre el Norte y el Sur y de respaldar políticas para aliviar la pobreza y el desempleo, la tendencia de las políticas de los estados árabes es vincular el desarrollo con la liberalización del comercio y relacionar los acuerdos multilaterales sobre derechos ambientales, socioeconómicos y culturales con los acuerdos de la OMC. Problemas fundamentales, como el endeudamiento, la asistencia oficial al desarrollo, la soberanía y la participación se centran en la liberalización comercial, el fomento de la inversión extranjera directa, la sustitución de convenciones y tratados multilaterales por acuerdos y relaciones comerciales bilaterales con el sector empresarial y las corporaciones transnacionales.

El actual sistema internacional de comercio gira en torno del concepto del acceso a los mercados. Se espera que las negociaciones comerciales y las soluciones a los conflictos aseguren el compromiso de los países para garantizar el acceso mutuo a los mercados. Se cree que los mercados abiertos conducen a sólidos principios desarrollistas. El sistema internacional de comercio aún se basa en incrementar el comercio y la volatilidad de capitales de bienes y servicios, en lugar de buscar acuerdos comerciales que garanticen el desarrollo de los países.

Para poder establecer un sistema comercial justo, deben materializarse dos requisitos previos. El primero es un contexto económico internacional que permita a los países en desarrollo emplear el comercio como un medio hacia el desarrollo y no como un fin en sí mismo. El segundo es una vía de salida de la actual crisis del sistema comercial que es consecuencia de la exclusión de los países en desarrollo de los mecanismos de toma de decisiones y su exposición a políticas financieras y económicas inapropiadas.

El argumento que relaciona la liberalización comercial con el crecimiento económico no es válido teórica ni empíricamente, especialmente dado que el comercio es sumamente sensible a factores externos, capacidades locales y recursos humanos. No hay evidencia que pruebe que la eliminación de las barreras comerciales conduzca necesariamente a mejorar el rendimiento económico. Las experiencias internacionales confirman que las condiciones y reglamentaciones aplicadas por la OMC son muy costosas y están fuera del alcance de muchos países árabes.

Las características adecuadas de un sistema de comercio mundial

El comercio no es por sí mismo un objetivo; es un medio para lograr un desarrollo local e internacional sostenible, equitativo y equilibrado – un desarrollo humano. Por lo tanto, es necesario reconsiderar el paradigma inexacto que relaciona la liberalización comercial con el desarrollo, la erradicación de la pobreza y la mejora de la vida de la gente.

El sistema de comercio internacional ideal sería el marco económico equilibrado que tome en cuenta las enormes diferencias en capacidades productivas, industriales y comerciales de los países desarrollados y en desarrollo. Ese sistema consideraría las características nacionales que diferencian a cada país de los demás, sin aplicar una fórmula única a todos los

países. El sistema internacional de comercio debe reevaluar sus objetivos y mecanismos, para no llevar a los países en desarrollo a incurrir en déficits que finalmente los conduzcan a caer en la trampa de la deuda.

La privatización de los servicios

Las ideas derivadas del Consenso de Washington tuvieron un impacto enorme en las reformas económicas de muchos países en desarrollo. Sin embargo, la forma en que estos países interpretaron esas ideas, y cómo optaron por implementarlas, variaron significativamente. Las aplicaciones y consecuencias de las políticas de liberalización y privatización según el análisis de ocho países árabes² son la base del siguiente análisis.

Antes de analizar las tendencias en común halladas en las experiencias de estos países, es importante señalar que existen algunas diferencias de país en país en cuanto al impacto de las políticas de liberalización y privatización. Las consecuencias difieren según la posición de cada país en el mercado financiero internacional (si son miembros o no de la OMC, el Consejo de Cooperación del Golfo o EUROMED³), la naturaleza del sistema económico (fuerte interferencia estatal, liberalización institucionalizada o transición económica) y la fecha de aplicación de las políticas de liberalización. Asimismo, hay diferencias destacadas en los sistemas políticos de cada país en cuanto a leyes judiciales, electorales y de asociación, y también en cuanto a la institucionalidad de sus partidos políticos. La estructura institucional de cada país determina la participación pública en el proceso de toma de decisiones de la liberalización y la privatización.

Políticas de liberalización y privatización: características y aplicaciones

Una tendencia común señalada en el diseño de las políticas de liberalización y privatización es la ausencia de una visión unificada y estratégica de dichas políticas. De hecho, las políticas de liberalización y privatización son aplicadas de manera distinta en cada sector y cada caso de privatización es tratado de manera distinta. Se percibe que los sectores de servicios y no productivos (como el de bienes raíces) están más sujetos a regulaciones de liberalización que el sector industrial (por ejemplo, en Egipto y Marruecos); el lucrativo sector de servicios suele ser el primero en ser rematado.

Otra tendencia se observa en los gobiernos que aceptan el doble discurso al crear asociaciones económicas con organizaciones regionales como EUROMED. Aunque promueven el acuerdo del GATT, este tipo de organizaciones sigue ejerciendo la protección de la libre transferencia de la mano de obra, la producción agrícola local y la industria textil, lo cual crea beneficios diferenciales (como en Egipto).

Asimismo, se señala que a través del proceso de liberalización de las economías y la privatización del patrimonio público, el Estado institucionaliza cada vez más su alejamiento del sector público (Egipto, Marruecos). Esto va de la mano con un cuestionamiento sistemático del derecho universal a los servicios estatales, como la educación y la salud.

La aplicación de estas políticas carece de coherencia y uniformidad, ya que el público no está al tanto de las condiciones ni de los beneficiarios de los negocios de privatización (Bahrein, Túnez). También puede mencionarse en este sentido la corrupción, que puede provocar el descarrilamiento de todo el proceso y el uso indebido de los ingresos del Estado. Asimismo, algunos países han practicado una política de vaivén (de la licitación pública a la nacionalización y de vuelta a la licitación), lo que provoca la desconfianza de las instituciones internacionales en las economías locales y disminuye su interés en los bienes públicos puestos a licitación (Libano).

Los principales objetivos de las políticas de privatización son vender los capitales públicos para activar el ciclo económico y asegurar el crecimiento. No obstante, la paradoja de este tipo de política es la incapacidad del Estado para recrear empleos en el mercado laboral en expansión debido a su

2 Sudán, Egipto, Libano, Marruecos, Palestina, Túnez, Jordania y Bahrein.

3 Euro-Mediterranean Partnership.

alejamiento progresivo de la esfera económica y la pérdida de control de sus sectores más lucrativos.

Una tendencia común a la mayoría de las políticas de privatización es su incapacidad o falta de voluntad para incluir a la sociedad civil local en el proceso de toma de decisiones. Esto se percibe mejor en la falta de transparencia en la realización de los negocios de privatización, así como en problemas políticos estructurales (falta de democracia, falta de organización y movilización) que impiden el desarrollo de voces críticas y la presentación de alternativas a la privatización (Palestina, Bahrein, Jordania).

Consecuencias observadas

Los efectos de la liberalización y la privatización aún no son totalmente aparentes a nivel nacional. Mientras las estadísticas iniciales sobre el resultado directo de la aplicación de estas políticas son obvias, la evaluación a largo plazo de esos resultados no es tan clara. Esto se debe principalmente a la aplicación relativamente reciente de las políticas, cuyos efectos se percibirán solamente en el futuro. Vale la pena mencionar que la privatización está teniendo lugar bajo la presión de déficits presupuestales que requieren de flujos de caja inmediatos. Esto lleva a practicar la privatización al azar, sin siquiera evaluar la factibilidad del caso. Además, la mayoría de los sectores privatizados fueron rehabilitados y reestructurados para ser lucrativos antes de su venta. La ausencia de comentarios estratégicos generales sobre las consecuencias de estas políticas está relacionada con la incapacidad de las sociedades civiles locales y de las ONG para supervisar el proceso de privatización y recabar datos confiables.

Aunque se espera que la privatización inyecte divisas a los presupuestos locales, la primera consecuencia directa de estas políticas es el incremento de los déficits presupuestales debido al descenso de los ingresos recaudados (Libano, Túnez, Egipto y Jordania). El descenso de lo recaudado se atribuye a la plena aplicación del acuerdo del GATT, que exime de impuestos a las transacciones generales y los aranceles aduaneros (Egipto, Marruecos). En algunos casos, esta recaudación fue sustituida por un nuevo sistema impositivo, como el Impuesto al Valor Agregado, que tiene un fuerte impacto social en la población.

La privatización o el crecimiento económico no implican necesariamente una mejora social o el desarrollo social sostenido. La finalidad de lucro en el proceso de privatización ejerce presión para incrementar los márgenes de ganancia y reducir los salarios. El descenso en los salarios afecta directamente el nivel de vida de las clases media y baja, más sensibles al incremento del costo de la salud y la educación, servicios que ahora son prestados por agentes privados o semiprivados en algunos países (Libano, Túnez, Marruecos).

Otra consecuencia de las políticas de liberalización y privatización es la incapacidad del sector público de competir con las instituciones extranjeras debido a problemas estructurales encontrados por este sector en términos de ingreso de capitales, eficacia y prestación de servicios. Algunos ejemplos serían los sectores del turismo y de los servicios en Egipto, que padecen fuertes desventajas competitivas con organizaciones internacionales que se benefician de la experiencia, la planificación y la abundancia de efectivo. Esto provoca la pérdida de participación de los servicios públicos en los mercados locales, lo que los coloca directamente fuera de la esfera económica (Egipto, Marruecos, Bahrein y Libano).

La participación de las mujeres en la fuerza laboral árabe sigue siendo menor, pero está mejorando, con algunas excepciones (Sudán). El efecto negativo de la privatización en la participación de las mujeres en la fuerza laboral del país es evidente. Esto se debe a la necesidad de reducir el número de empleados con la esperanza de mejorar la eficacia. La correlación entre la cantidad de empleados y la eficacia general no siempre es válida, especialmente cuando otras variables (como el nombramiento basándose en la afinidad política y no en el mérito) afectan la productividad de los trabajadores. No obstante, al procurar eliminar la mano de obra excedente, las políticas de privatización que apuntan especialmente a los sectores de la salud y la enseñanza, donde

predominan las mujeres, afectan directa e injustamente a las mujeres. Ellas son las primeras en ser despedidas en épocas de crisis, principalmente por razones culturales que asignan a las mujeres roles de género específicos (Túnez, Marruecos).

Otra consecuencia destacada de la privatización es su efecto negativo en el medio ambiente. Debido al creciente alejamiento del Estado de las esferas económicas, el mismo está menos capacitado para hacer cumplir las leyes que protejan el medioambiente. Asimismo, debido al crecimiento de los niveles de pobreza absoluta (90% en Sudán), la población está obligada a buscar medios alternativos de supervivencia, generalmente a costas de la sostenibilidad ambiental.

Algunos modelos específicos de privatización y liberalización

El informe palestino de Social Watch de este año señala que el debate político sobre la privatización está actualmente en espera, como resultado de la singular dependencia de ese país en fuentes privadas o públicas para la prestación de servicios básicos como la salud y el agua. Debido a la ausencia histórica y la incapacidad crónica del Estado para proveer servicios a la población, los palestinos dependen de las ONG extranjeras para los servicios sanitarios y del gobierno israelí para el abastecimiento del agua para saneamiento y riego.

La inestabilidad social interna tiene efecto directo en el modelo de privatización de algunos países, como es el caso de Sudán. El gobierno federal de Sudán comenzó la liberalización y la privatización ya en los años 70. Aunque el país cumplía sus metas del pago de la deuda, instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no podían reestructurar el servicio de la deuda ni reducirla debido a vetos políticos y económicos externos contra el régimen de gobierno sudanés. Los efectos negativos de las sanciones internacionales, junto con las consecuencias negativas de la privatización, sólo fueron acentuados por el conflicto civil interno, que llevó la pobreza extrema a niveles alarmantes.

Hacia una alianza internacional contra la guerra y una globalización alternativa

En virtud de esta compleja realidad y de los peligrosos cambios geopolíticos que enfrenta la región, existe la necesidad de que las organizaciones árabes de la sociedad civil, a través de movimientos sociales y ONG, participen del proceso de decisiones políticas y de la supervisión de las políticas nacionales que conduzcan a economías y servicios más liberalizados. Deben luchar para alcanzar la justicia social basada en el respeto de los derechos humanos, la democracia, la participación, la autonomía del sistema y las instituciones judiciales y la protección del ambiente.

La consecuencia principal de la privatización y la transferencia insuficiente, incoherente y poco transparente de propiedad al sector privado es el incremento del sufrimiento de la población. Por consiguiente, es necesario reformular las políticas nacionales basadas en la transparencia y la responsabilidad. Deben fortalecerse las organizaciones de la sociedad civil e instaurarse sistemas democráticos para asegurar que la propiedad no se transfiera a terceros relacionados con los funcionarios de gobierno, y que los ingresos del Estado no sean empleados en forma indebida.

Además, deben reforzarse las relaciones entre ONG, movimientos sociales y sociedades civiles del Norte y aquellas de los países árabes. Son necesarias alianzas regionales fuertes con organizaciones internacionales importantes, basadas en la clara comprensión de la globalización liberal y sus amenazas. Esto debe acompañarse con una visión de alternativas posibles fijada por coaliciones populares.

Deben hacerse las gestiones para construir un mundo diferente donde reinen la paz, la justicia, la libertad y la democracia.

Otro mundo árabe es aún posible. ■

Arab NGO Network for Development
<annd@cyberia.net.lb>